

Declaración nacional delegación República Dominicana Sexta Sesión del Grupo de Expertos Encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético

Viena, 27 a 29 de julio de 2020 (formato virtual)

La delegación de la República Dominicana desea agradecer los esfuerzos de la Secretaría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por la organización de la Sexta Sesión del Grupo de Expertos Encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético, a pesar de las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.

El Gobierno dominicano reitera su compromiso con los trabajos de este Grupo de Expertos, por entender que constituye el foro internacional más importante para el intercambio de información sobre legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional, con miras a fortalecer las respuestas a nivel nacional e internacional contra al delito cibernético.

Nos encontramos frente a una amenaza global en constante evolución que requiere de una atención especial, permanente y oportuna por parte de todos los Estados Miembros, tomando en cuenta que una cadena es tan fuerte como su eslabón mas débil.

Es por ello que cobra especial relevancia plantearnos desde ya cuál será el futuro de este Grupo de Expertos, cuyo mandato asignado por la Asamblea General de Naciones Unidas concluye en el año 2021.

En lo que respecta al componente de **cooperación internacional** muchos siguen siendo aún los desafíos que tenemos por delante. La armonización de las disposiciones de penalización, el establecimiento de herramientas procesales para llevar a cabo las investigaciones y la clara determinación de la jurisdicción competente a los efectos de la obtención de pruebas electrónicas, se cuentan entre las tareas pendientes.

La lucha efectiva contra el problema del delito cibernético pasa necesariamente por aumentar y acelerar la cooperación entre nuestros Estados. Se impone la aplicación de la legislación internacional vigente, así como los tratados y acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales pertinentes sobre ciberdelincuencia, con miras a fomentar la cooperación internacional en materia de asistencia judicial y aplicación de la ley en casos conexos, respetando al mismo tiempo los principios de soberanía, igualdad y reciprocidad.

Se requieren herramientas legales que permitan a los Estados acceder directa y rápidamente a las pruebas relacionadas con los casos bajo su jurisdicción. En ese sentido, mi delegación desea felicitar los esfuerzos del Consejo de Europa para el desarrollo del segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest con miras a mejorar el acceso a las pruebas electrónicas de las investigaciones penales donde quiera que estas se encuentren físicamente, proceso en el cual estamos participando activamente.

Asimismo, en lo que respecta al componente de **prevención**, debemos identificar medidas eficaces de prevención del delito cibernético a nivel nacional e internacional, tomado en cuenta las necesidades particulares de los países en vías de desarrollo.

En ese sentido, cabe destacar la importancia del apoyo de la comunidad internacional para el desarrollo de capacidades, siendo aspectos vitales la capacitación constante y permanente de los distintos actores del sistema de administración de justicia, jueces, fiscales y agentes de seguridad; la creación y estructuración adecuada de unidades especializadas de investigación y enjuiciamiento de delitos cibernéticos; y el acceso a tecnologías de última generación para la investigación de delitos cibernéticos y el análisis forense digital.

Desde 2003, la República Dominicana ha avanzado de manera significativa en la lucha contra el delito cibernético. En ese sentido, cabe destacar la creación de la primera unidad policial de investigación cibernética en 2004; la promulgación de una legislación sobre delitos informáticos en 2007; la creación de un servicio especializado de enjuiciamiento cibernético en 2013; la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) en 2013; el establecimiento de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2018; y la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad y de un Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) en 2018.

Finalmente, y a la luz de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 74/247, mediante la cual se establece un comité intergubernamental especial de expertos a fin de elaborar una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, la República Dominicana desea reiterar su compromiso para con este proceso y su voluntad de trabajar junto con los demás Estados Miembros para lograr un instrumento internacional que nos represente a todos.

Creemos firmemente que el proceso de desarrollo de un posible nuevo instrumento debe guiarse por los principios de transparencia, imparcialidad e inclusión, y que los derechos humanos y las libertades fundamentales deberán protegerse en todo momento. Confiamos en que un trabajo en conjunto, sobre la base de un proceso de toma de decisiones por consenso, redundará en el éxito y eficacia de un futuro convenio internacional.

En ese sentido, un Presidente neutral y el debido equilibrio en la composición de la Mesa serán cruciales.

Asimismo, creemos firmemente que en este proceso deberá tomarse en cuenta el trabajo de este Grupo de Expertos.

En cualquier caso, y mientras este proceso concluye, es vital que hagamos uso de las herramientas que están disponibles para su uso inmediato, como son el Convenio de Budapest y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), de forma que podamos dar una respuesta satisfactoria a las víctimas de los delitos cibernéticos que tenemos hoy día, todos los días.

La República Dominicana desea reiterar su deseo de continuar trabajando de la mano con la comunidad internacional en la consecución de un ciberespacio más seguro.

Courtesy translation

National Statement Delegation of the Dominican Republic Sixth Session of the Open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime

Vienna, July 27 to 29, 2020 (virtual format)

The delegation of the Dominican Republic wishes to thank the Secretariat of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) for its efforts on organizing the Sixth Session of the Open-ended Intergovernmental Expert Group to Conduct a Comprehensive Study of the Problem of Cybercrime, despite the exceptional circumstances in which we find ourselves due to the effects of the COVID-19 pandemic.

The Dominican Government reiterates its commitment to the work of this Group of Experts, as we believe that it constitutes the most important international forum for the exchange of information on national legislation, best practices, technical assistance and international cooperation, with a view to strengthening responses at the national and international levels against cybercrime.

We are facing a constantly evolving global threat that requires special, permanent and timely attention from all Member States, taking into account that a chain is as strong as its weakest link.

That is why it is especially relevant to ask ourselves what the future of this Group of Experts will be, as the mandate assigned to it by the United Nations General Assembly ends in 2021.

With regard to the **international cooperation** component, many challenges still lie ahead. The harmonization of the criminalization provisions, the establishment of procedural tools to carry out the investigations and the clear determination of the competent jurisdiction for the purposes of obtaining electronic evidence, are among the pending tasks.

The effective fight against cybercrime necessarily involves increasing and accelerating cooperation between our States. Enforcement of existing international law, as well as relevant multilateral, regional and bilateral cybercrime treaties and agreements, is a must, with a view to fostering international cooperation in judicial assistance and law enforcement in related cases, while respecting the principles of sovereignty, equality and reciprocity.

Legal tools are required to allow States to quickly and directly access evidence related to cases under their jurisdiction. In this regard, my delegation wishes to welcome the efforts of the Council of Europe to develop the second additional protocol to the Budapest Convention with a view to improving access to electronic evidence for criminal investigations wherever they are physically located, a process in which which we are actively participating in.

Likewise, regarding the **prevention** component, we must identify effective cybercrime prevention measures at the national and international levels, taking into account the particular needs of developing countries.

In this sense, it is worth highlighting the importance of the support of the international community for capacity building, being vital aspects the constant and permanent training of the different actors of the justice administration system, judges, prosecutors and security agents; the creation and adequate structuring of specialized units for the investigation and prosecution of cyber crimes; and access to cutting-edge technologies for cybercrime investigation and digital forensics.

Since 2003, the Dominican Republic has made significant progress in the fight against cybercrime. In this sense, it is worth noting the creation of the first police for cyber investigation unit in 2004; the enactment of legislation on cybercrime in 2007; the creation of a specialized cyber prosecution service in 2013; the ratification of the Council of Europe's Convention on Cybercrime (Budapest Convention) in 2013; the establishment of a National Cybersecurity Strategy in 2018; and the creation of a National Cybersecurity Center and a National Computer Security Incident Response Team (CSIRT) in 2018.

Finally, and in light of United Nations General Assembly Resolution No. 74/247, which establishes a special intergovernmental committee of experts to prepare a comprehensive international convention on the fight against the use of information technologies and communications for criminal purposes, the Dominican Republic wishes to reiterate its commitment to this process and its willingness to work together with all Member States to achieve an international instrument that represents us all.

We firmly believe that the process of developing a new instrument must be guided by the principles of transparency, fairness and inclusion, and that human rights and fundamental freedoms must be protected at all times. We trust that a joint work, based on a consensus decision-making process, will result in the success and effectiveness of a future international treaty.

In that sense, a neutral Chair and a balanced Bureau will be crucial.

Furthermore, we firmly believe that the work of this Group of Experts should be taken into account in this process.

In any case, and while this process is concluded, it is vital that we make use of the tools that are available for immediate use, such as the Budapest Convention and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), in a manner that we can give a satisfactory answer to the victims of cyber crimes that we have today, every day.

The Dominican Republic wishes to reiterate its desire to continue working hand in hand with the international community in achieving a safer cyberspace.